



La consulta plantea diversas cuestiones relativas a la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, en el supuesto en el que una entidad domiciliada en otro Estado opere en España a través de una sucursal en régimen de libre establecimiento en territorio español, considerando la propia consulta que resultaría aplicable al tratamiento de datos llevado a cabo por dicha sucursal lo dispuesto en el artículo 2.1 a) de la citada Ley Orgánica, en conexión con el artículo 4.1 a) de la Directiva 95/46/CE.

Como cuestión previa, debe indicarse que el citado precepto, así como el artículo 3.1 a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, será de aplicación en caso de que la entidad de la que quien trata sus datos sea una sucursal se encuentre ubicada en la Unión Europea. En dicho supuesto, el criterio relevante para la aplicación de la Ley española será que el tratamiento sea llevado a cabo en el marco de las actividades de la sucursal ubicada en España. En este sentido, debe recordarse que la artículo 3.2 del Reglamento establece un concepto amplio de “establecimiento” como criterio para la delimitación de la normativa aplicable, siguiendo el mantenido igualmente por la Directiva 95/46/CE.

Si la empresa se encontrase ubicada fuera de la Unión Europea, el criterio del establecimiento deja de ser el relevante para la delimitación de la Ley aplicable, de modo que la Ley española sería aplicable incluso cuando el tratamiento no se llevase a cabo en el ámbito del establecimiento o sucursal ubicado en España, pero se utilizasen en la recogida de los datos medios ubicados en España y que no fueran empleados exclusivamente con fines de tránsito (artículo 2.1 c) de la Ley Orgánica).

La anterior acotación resultaba relevante a efectos de delimitar el ámbito de contestación de la consulta planteada, dado que de lo señalado en la misma se presumirá que el tratamiento de los datos es llevado a cabo directamente por la sucursal española de una empresa comunitaria, de forma que recae sobre la misma la capacidad de decisión sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, requisitos exigidos por la Ley Orgánica 15/1999 para que la misma pueda ser considerada responsable del fichero.

Dicho lo anterior, como bien señala la consulta, el artículo 5.1 f) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 define al responsable del fichero, considerando que podrán serlo “los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados”. Teniendo esto en cuenta, esta Agencia ha venido considerando que si la concurrencia de las condiciones

exigidas por las normas de protección de datos corresponden a la sucursal, será ésta la responsable del tratamiento, debiendo la misma proceder a la inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos y dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, a la que queda plenamente sujeto el tratamiento llevado a cabo.

La consulta plantea igualmente cómo ha de articularse la transmisión de los datos a la matriz de la que depende la sucursal, debiendo nuevamente presumirse que la misma se encuentra ubicada en el territorio de la Unión Europea.

En este caso, como punto de partida, no existirá una transferencia internacional de datos, dado que la misma únicamente se produciría en caso de encontrarse dicha matriz situada fuera del territorio del Espacio Económico Europeo, tal y como se desprende del concepto contenido en el artículo 5.1 s) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, pero existiría una transmisión de datos que deberá incardinarse en alguno de los conceptos previstos en la Ley Orgánica 15/1999.

En cuanto al concepto de cesión de datos, el artículo 5.1 c) del Reglamento, siguiendo lo establecido en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica, la define como “tratamiento de datos que supone su revelación a una persona distinta del interesado”, pudiendo plantearse si en el presente caso, dada la integración de la sucursal en la entidad cesionaria, tal y como se señala en la consulta, existiría realmente una transmisión de datos a un tercero, pues el tratamiento se llevaría a cabo en el ámbito de la propia empresa.

Prescindiendo del análisis del supuesto planteado como cesión, debe en todo caso señalarse que la transmisión de datos a la matriz supondría la utilización de los datos por parte de la misma, lo cual, en principio, y teniendo en cuenta los escuetos términos de la consulta, no encajaría inicialmente en la finalidad que justificó el tratamiento de los datos por parte de la sucursal.

Debe a tal efecto recordarse que el “poder de decisión” delimitador de la condición de responsable del tratamiento recae, según se desprende de la propia consulta en la sucursal de la compañía en España, por lo que el tratamiento de los datos para las finalidades que justificaron su recogida parece circunscribirse a la utilización de los datos por parte de la mencionada sucursal.

De este modo, la transmisión de los datos a la entidad “matriz” supondría un tratamiento de los mismos para otros fines distintos de los que justificaron esa recogida y que, en principio deberían ser llevados a cabo por la sucursal ubicada en España, por lo que sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

Debe a tal efecto recordarse que el artículo 3 c) de la Ley Orgánica 15/1999 establece, siguiendo la normativa comunitaria, un concepto amplio de tratamiento, en que se encuentran englobados tanto el uso de los datos como su cesión, por lo que será en todo caso necesaria la existencia de una legitimación adecuada para ese tratamiento distinto al inicialmente llevado a cabo.

Ello supone que la utilización de los datos por parte de la “matriz” debería encontrarse legitimado por alguna de las causas que establece la legislación española en materia de protección de datos y que, de forma uniforme, en desarrollo de los artículos 6, 11 y 21 de la Ley Orgánica 15/1999, establece el Reglamento de desarrollo de la misma en su artículo 10.

Así, por ejemplo, sería posible la utilización de los datos por la “matriz” cuando la misma fuera necesaria para el desarrollo, mantenimiento o control de la relación jurídica que vincula al afectado con la sucursal o cuando se contase con el consentimiento del afectado.

En todo caso, como se indicó con anterioridad, el tratamiento, en las condiciones que parecen derivarse de la consulta, se encuentra sujeto a la legislación española, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica, el interesado debería ser informado no sólo del llevado a cabo por la sucursal en España, sino, en su caso, por el que se realizase por la “matriz” a la que se refiere la consulta.